

*nacio Ramirez.—J. M. del Castillo Velasco.—M. Auza.—S. Guzman.—Luis Velazquez.—M. Zavala.—José García Ramirez.—Luis M<sup>a</sup> Aguilar, secretario.*

Es copia que certifico. México, Setiembre 4 de 1872.—*Lic. Agustin Peralta, oficial mayor.*

AMPARO de garantías promovido ante el Juzgado de Distrito de Aguascalientes, por María Rosario Arellanos, á nombre de su marido Pablo Esquivel, contra el Gefe político del Distrito, C. Diego Ortigoza, que lo consignó al servicio de las armas.

#### PEDIMENTO DEL O. PROMOTOR FISCAL.

O. juez de Distrito:

El Gefe de Hacienda que suscribe, en ejercicio del Ministerio fiscal por falta de Promotor, expone: que por la manifestación que hace el O. Gefe político Diego Ortigoza, fechada el día 18 del actual, se ve, que el quejoso Pablo Esquivel fué remitido á la cárcel de esta ciudad, por el hurto de un guajolote y unos gallos; que este hecho y otros del mismo género que ha verificado el relacionado Esquivel, impulsaron al dicho Gefe político á consignarlo al servicio forzoso de las armas en el ejército. Estos son los puntos de hecho.

La legislación comun del país tiene señalada la parte penal para todos los delitos conocidos; y ninguna en la actualidad, impone el servicio forzoso de las armas al reo de hurto, como presuntivamente lo es Pablo Esquivel.

Si como á no dudarlo, esas consideraciones inspiraron la resolución de la junta calificadora, para consignar al servicio de las armas al referido Esquivel; entonces el espíritu y letra de la ley de 17 de Mayo último, han sido falseados, puesto que no ha averiguado si Esquivel es casado y sostiene á su mujer ó hijos; sino

únicamente atendió al registro de las faltas que ha mencionado el Gefe político.

Para esas faltas tienen correctivos suficientes nuestras leyes comunes, y pernicioso y degradante es para el ejército nacional consignarlo para su personal hombres de perversas costumbres.

La queja elevada por la mujer de Esquivel, hace presumir fundadamente que este atiende á la sustentación de ella y de su familia; y este caso es de los que constituyen expresa excepción para ser destinados los individuos al forzoso servicio de las armas. Atendido lo expuesto, esta promotoría opina por que debe concederse el amparo que á favor de su marido Pablo Esquivel solicita María Rosario Arellanos. Sin embargo, ese Juzgado determinará lo que crea de justicia.

Aguascalientes, Julio 22 de 1872.—*A. Cornejo.*

Es copia del original, que está inserto en el expediente. Aguascalientes, Julio 22 de 1872.—*A. Cornejo.*

#### SENTENCIA del C. juez de Distrito.

Aguascalientes, 8 de Agosto de 1872.—Visto el presente recurso de amparo, promovido por M<sup>a</sup> Rosario Arellanos, á favor de su marido Pablo Esquivel, por haber sido consignado al servicio de las armas por el Gefe político de esta municipalidad, C. Diego Ortigoza; vista la ratificación del mismo Esquivel, de la solicitud que á beneficio suyo hizo su esposa fundándose la reclamación de ambos consortes contra semejante consignación, entre otras varias razones, en la principal, muy esencial y legalísima, de estar exceptuado Esquivel del servicio por la fracción 2<sup>a</sup>, artículo 2<sup>o</sup> de la ley de 17 de Mayo último, violándose con esa escandalosa infracción, á mas de la ci-

tada ley, la garantía individual que otorga el artículo 5º del Código fundamental de la República á todos sus habitantes, contra cuya violación, los quejosos piden amparo á la Justicia de la Unión.

Visto el informe de la autoridad política, que pretende justificar el acto reclamado, exponiendo: que Pablo Esquivel ha estado repetidas ocasiones preso y sentenciado, por circulación de moneda falsa y diversos hurtos, como el de un guajolote y unos gallos, por lo cual se le aprehendió últimamente; y que constando esos reiterados delitos y su condena por ellos, de los libros de la Gefatura y de los respectivos asientos de la alcaidía de la cárcel; en vista de tales antecedentes, creyó el informante que la mala y viciosa conducta de dicho Esquivel se corregiría con la disciplina militar, y por eso lo remitió á la junta calificadora de reemplazos, la que lo destinó al ejército.

Visto el parecer del C. Promotor fiscal, quien opina en sustancia: que debe concederse al quejoso el amparo que solicita, porque no hay en la legislación común del país, ninguna ley que á los acusados de los enunciados delitos, les imponga por su conducta viciosa y criminal la pena del servicio forzoso de las armas, cosa que sería perniciosa y degradante para el ejército nacional, habiendo otras penas legales que aplicará esas gentes depravadas, para su corrección ó castigo.

Vistas las pruebas producidas por el actor en este negocio, las que llaman fuertemente la atención, pues, según ellas, aparece que Pablo Esquivel es casado, padre de cuatro hijos y uno por nacer, estando además *consagrado al sostenimiento de su familia*; y visto por último, cuanto fué conveniente y necesario ver y examinar, resulta de todo.

Primero: que Pablo Esquivel, por los delitos de que lo acusa la Gefatura política, fué juzgado y sentenciado por aque-

lla autoridad, sobre cada uno de tales delitos en particular; y después, en juicio general, lo condenó por todos ellos, destinándolo al contingente de sangre con flagrante contravención de la ley fundamental de la República; ley suprema sobre todas las leyes nacionales, la cual en su artículo 24, expresa y terminantemente, hace la siguiente declaración: "Nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito, ya sea que en el juicio se le absuelva ó se le condene."

Segundo: que además, en ese juicio universal, se infringió á la vez con el anterior, otro artículo constitucional, el 21, que hace también esta terminante declaración: "La aplicación de las penas propiamente tales, es exclusiva de la autoridad judicial;" y en el caso de que se trata, la autoridad política y la junta calificadora de los reemplazos que deben cubrir las bajas del ejército, impusieron á Esquivel una pena *propriadamente tal*, como lo es la de condenar á un individuo al servicio de las armas por cinco años; y esto sin estar facultados para ello, el C. Gefa político y aquella junta, ni aun siquiera por una ley excepcional como la fulminada contra los salteadores y plagiarios; sin haberle hecho saber el motivo de aquel procedimiento judicial, sin tomarle su declaración preparatoria dentro del término legal, ni haberlo careado con los testigos que depusieron contra él, ni haberle facilitado los datos indispensables del proceso (porque no lo hubo) para preparar sus descargos, ni haber oído, en fin, la defensa del acusado, hecha por sí ó por persona de su confianza, violándose así en la aplicación de tan gravísima pena esas cuatro garantías otorgadas á los acusados y á todos los habitantes y estantes de la República, en la solemne declaración de los derechos del hombre, tít. 1º, sección 1ª, art. 20 de la Constitución Federal.

Tercero: por otra parte, según el art. 5º del mismo Código, nadie puede ser

obligado á prestar trabajos personales sin su pleno consentimiento; y á Esquivel, á guisa de forzado y convirtiendo el cuartel en presidio y una carrera llena de honor, en castigo para los delincuentes y galeotes, se le destinó contra su voluntad al trabajo personal de las armas, penosísimo y muy peligroso.

Quarto: siendo demasiado manifiesta la incompetencia de las autoridades que pronunciaron la sentencia que nos ocupa, materia del acto reclamado, es además muy afrentoso para el ejército nacional, el que los cinco años de servicios exigidos en él como una obligación del ciudadano mexicano, se haya reputado de castigo á trabajos forzados para el delincuente, y que después de tan enorme afrenta para el ciudadano y el soldado, se infligiese á Esquivel ese castigo estando exceptuado del servicio militar por el decreto de 17 de Mayo último, cuyo art. 2º, entré las bases que pone para cubrir las bajas del ejército, declara: "1º No se destinará al ejército ni á otro trabajo personal contra su voluntad. ..." "2º A los casados que consagrados estén al sostenimiento de su familia."

Quinto: que estando Pablo Esquivel en el número de esos casados, no se comprende cómo la junta calificadora lo destinó al contingente de sangre, sin estar ella en rebelion abierta contra las leyes y la Constitución federal, lo que solo se puede explicar atendiendo á que procedió sin el detenimiento y circunspección debida, obrando atropelladamente, pues de otro modo no se habría puesto á juzgar en vez de calificar las excepciones de recluta, trasformándose así en jurado de acusación y de sentencia simultáneamente, para imponer á Esquivel una pena *propriamente tal* y gravísima, por sus yerros pretéritos y presentes.

Sexto: sea como fuere, si el juez que suscribe no lo amparase, se haría reo de prision arbitraria incurriendo por tan culpable prevaricato, según lo determina

expresamente la precitada ley de 17 de Mayo, en las penas que ella impone contra las autoridades que de *cualquiera manera* infrinjan sus disposiciones; y en la presente cuestión, negándole á Esquivel el amparo, no se infringía de *cualquiera manera* y así como quiera, sino de un modo violento y escandaloso, por exceptuar al quejoso aquella ley, muy explícita y claramente del servicio militar.

En vista de las consideraciones expuestas y con arreglo á los artículos 1º y 2º de la ley de 20 de Enero de 1869, y 2º de la de 17 de Mayo último, se falla este juicio con las siguientes proposiciones.

1º La Justicia de la Union ampara y protege al C. Pablo Esquivel en la garantía que le otorga el artículo 5º de la Constitución federal, contra la providencia que lo destinó al servicio forzoso de las armas.

2º Notifíquese esta sentencia, publíquese en el periódico oficial del Estado, en el *Diario Oficial y Semanario Judicial* de la federación, y remítase á la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El C. Lic. Luis G. Solana, juez de Distrito del Estado, así lo decretó y firmó.—*G. Solana.*—*Silverio Arteaga*, secretario.

Es copia que certifico. Aguascalientes, 10 de Agosto de 1872.—*Luis G. Solana.*

#### EJECUTORIA de la Suprema Corte de Justicia.

México, Setiembre 3 de 1872.—Visto el juicio de amparo promovido ante el Juzgado de Distrito de Aguascalientes por Rosario Arellano, á nombre de su marido Pablo Esquivel, contra el Jefe político del Distrito C. Diego Ortigoza que lo consignó al servicio de las armas reputándolo reo de un robo de un guajolote y unos gallos y considerando: que en el caso de que Esquivel sea res-

ponsable de tal delito debió ser puesto á disposicion de la autoridad judicial para que lo juzgase, y que su consignacion al servicio de las armas, contra su voluntad, ataca la garantía á que se refiere el artículo 5º de la Constitucion Federal, se decreta: que se confirma la sentencia pronunciada el 8 del mes próximo pasado por el Juzgado de Distrito de Aguascalientes, que declara: que la Justicia de la Union ampara y protege á Pablo Esquivel en la garantía que le otorga el artículo 5º de la Constitucion Federal, contra la providencia que lo destinó al servicio forzoso de las armas.

Devuélvanse sus actuaciones al Juzgado de que proceden, con copia certificada de esta sentencia para los efectos consiguientes: publíquese y archívese á su vez el Toca.

Así lo decretaron por unanimidad de votos los CC. Presidente y Ministros que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos-mexicanos y firmaron.—*Pedro Ogazon.*—*Juan J. de la Garza.*—*José Arteaga.*—*Pedro Ordaz.*—*Ignacio Ramirez.*—*J. M. del Castillo Velasco.*—*Simon Guzman.*—*Luis Velazquez.*—*M. Zavala.*—*José García Ramirez.*—*Luis María Aguilar,* secretario.

Es copia que certifico. México, Setiembre 5 de 1872.—*Lic. Agustín Peralta,* oficial mayor.

AMPARO de garantías promovido ante el Juzgado de Distrito de Chiapas por D<sup>a</sup> Nicolasa Velasco, D<sup>a</sup> María Velazquez y D. Abraham de Jesus Aguilar, contra la Gefatura de Hacienda de ese Estado, que remató al C. Pánfilo Ortega la casa de altos conocida por de "Velasco y Martinez," situada en la plaza principal de San Cristóbal.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. juez de Distrito:

El 8 del mes que hoy acaba, D<sup>a</sup> Nico-

lasa Velasco, D<sup>a</sup> María Velazquez y el C. Abraham Aguilar, se han presentado solicitando la proteccion y amparo de la Justicia Federal, contra el auto de remate de la Gefatura superior de Hacienda del Estado, que con fecha 7 de Mayo último dictó, enajenando la casa de altos, conocida por de la Sra. Martinez, sita en una de las esquinas de la plaza principal de esta ciudad, al C. Pánfilo Ortega, por la suma de tres mil ochocientos pesos, pagaderos en la forma que establece la ley de 10 de Diciembre de 1869, y en la que tienen por herencia paterna mil quinientos pesos, que precisamente se evidencian en la escritura de 4 de Junio de 1829, la misma que á la Gefatura sirvió de base para sus operaciones; fundando su queja en que esta, erigiéndose en tribunal especial y del todo incompetente, al calificar y excluir sus derechos reales, como lo ha hecho, ataca y vulnera los artículos 13 y 16 de la Constitucion general de la República, que les concede la garantía de no ser juzgados por un tribunal especial, y en caso de serlo, se verifique por uno competente, previa la sustanciacion del juicio que corresponda en materia contenciosa que, para el caso, solo juzgan serlo el del digno cargo de vd.: que para dictar esta providencia, nombró la Gefatura un fiscal especial contra disposiciones terminantes, con quien de comun acuerdo falló, que la accion del erario era de mejor derecho que la de ellos; que su prueba testimonial era ineficaz; y que por tanto se desechaba su solicitud, dejando su derecho á salvo, para cobrar á la Nacion cuando y como se pudiera.

Pedido el informe respectivo á la Gefatura de Hacienda lo rindió en 11 del corriente, contrariando las aseveraciones de los quejosos y presentando por justificante de sus procedimientos, las diligencias corridas en su oficina, para hacer el remate y cobrar dos capitales